DROGAS Y MEDIO AMBIENTE[1]

Por: Germán Márquez, Profesor Universidad Nacional de Colombia [2]

El problema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico tiene, entre sus múltiples dificultades, la falta de alternativas económicas y socialmente razonables para su sustitución. Este artículo considera una propuesta surgida, por una parte, del movimiento ambiental[3] y también sustentada por el gobernador de Antioquia y, en alguna medida, por el expresidente López[4], para buscar dicha sustitución por plantaciones forestales.

Fundamentalmente, se trata de analizar la viabilidad y proponer el estudio de un vasto programa de reforestación que pueda atraer recursos destinados a reconversión o destrucción de cultivos, para unirlos con recursos destinados a la conservación de la selva y a controlar el efecto invernadero y el consecuente cambio climático, de tal manera que pueda convertirse en una opción frente a los narcocultivos. La idea es que ello permita crear un fondo suficientemente amplio para enfrentar varias facetas, en especial, la social y ambiental, de un problema que nos está desbordando por falta de opciones.

Para ello hay que partir de que la colonización impulsada por la coca y la amapola es, hoy en día, causa principal de destrucción de selvas y bosques en Colombia[5] y otros países latinoamericanos; el impacto es especialmente grave sobre los bosques amazónicos y también sobre los bosques alto andinos. Dicha colonización, combinada con otros agentes, deforesta y transforma 600.000 hectáreas por año en el país[6], lo que, de continuar, señalaría que a la selva no le quedan 40 años de existencia. La droga añade, así, a sus daños sobre la salud humana y social, su contribución a cambios y desequilibrios climáticos e hidrológicos planetarios, resultantes de la pérdida de regulación ecológica y del incremento de CO_2 atmosférico y su efecto invernadero a consecuencia del arrasamiento de la selva.

Los desequilibrios son causa de inundaciones, sequías y huracanes cada vez más frecuentes y cuyos costos son ingentes; la pérdida de cosechas en todo el mundo ha llevado a los niveles más bajos de seguridad alimentaria desde la Segunda Guerra Mundial. Para Colombia la deforestación significa, además, pérdida de biodiversidad, quizá la más importante alternativa con que cuenta para escapar al subdesarrollo y para negociar con los países desarrollados, como potencia natural en este recurso.

Deterioro social e impacto ambiental se suman en la droga para convertirla en una amenaza aún mayor de la que solemos percibir. La importancia del fenómeno del cambio climático asociado a la destrucción de selvas y bosques es tal que, según Al Gore[7], actual vicepresidente de los Estados Unidos, constituye la "mayor amenaza estratégica" al bienestar de la humanidad y a la hegemonía política y económica de su país, en la medida que las perturbaciones climáticas pueden generar hambrunas y guerras profundamente desestabilizantes a nivel planetario. En el mismo sentido, las selvas y los bosques constituyen ecosistemas estratégicos cuya protección es prioritaria.

El reconocimiento del impacto ambiental de la producción de drogas refuerza la necesidad de encontrar soluciones al problema. Desde una perspectiva convencional, existe la opción de

---

[1] Márquez, G. Medio ambiente y violencia en Colombia: una hipótesis. Análisis Político Nº 29: 113-116. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1996.

[2] Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biología e Instituto de Estudios Ambientales IDEA UN. Bogotá, Colombia. E-mail: gmarquez@ciencias.unal.edu.co.

[3] *El Tiempo*, Entrevista con Julio Carrizosa, director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, agosto 21 de 1996 (pág. 3 A).

[4] *El Tiempo*, "Los árboles no dejan ver el bosque", Artículo de Alfonso López M., noviembre 4 de 1996 (pág. 5 A).

[5] Ver, entre otros, Márquez, G. "El futuro de la selva", *en*: Ecosistemas estratégicos y otros estudios de ecología ambiental. Fondo FEN Colombia, Bogotá, 1996.

[6] Varios, Perfil ambiental de Colombia, USAID- Colciencias, 1989.

[7] Gore, Al. La tierra en juego. EMECE Editores, Buenos Aires, 1992.

profundizar en la guerra, hasta ahora infructuosa, para erradicar los cultivos, fumigándolos y reprimiendo a sus cultivadores. Los daños son previsibles: el arrasamiento de los cultivos se suma el debido a los pesticidas y a los nuevos cultivos que, para reemplazar los destruidos, se hacen cada vez más selva adentro. Una versión extrema de esta guerra llevaría a intervenciones más radicales, entre países, argumentando el peligro inminente que drogas y cambio climático representan para la seguridad nacional e internacional: una geopolitización del conflicto, invocando los más altos intereses de la humanidad.

Desde otra perspectiva cabría esperar que en nombre de los mismos intereses, se busquen soluciones más adecuadas. Cualquiera de ellas tendría que considerar que revertir la destrucción de la selva por la narcocolonización requiere más que la buena voluntad de un puñado de ambientalistas, pues a los costos normales de conservación de la naturaleza se añaden los de ofrecer alternativas a uno de los mejores negocios del planeta; quizá ello explica el virtual fracaso de programas como el Plante.

Quienes pagan por la coca y la heroína están pagando también por el arrasamiento de la selva y del planeta; lo mismo hacen quienes pagan por las maderas, la fauna, las pieles, las tierras e incluso, como se ha denunciado, por hamburguesas, a través de la famosa *hamburger connection*. Pero, ¿quién está dispuesto a pagar por su conservación? ¿quién, por el clima planetario? ¿por la seguridad alimentaria? ¿se podría esperar que algo del dinero que se invierte en helicópteros de guerra y en fumigación se dedique a revertir la destrucción en vez de profundizarla? Lo que se plantea es que podrían existir alternativas distintas. Que los esfuerzos en pro de la conservación de la naturaleza y la lucha contra la droga podrían unirse contra un enemigo común.

En este contexto se plantea la posibilidad de sustituir plantaciones de coca y amapola con plantaciones de bosques, en especial de árboles maderables nativos. Tal posibilidad se fundamenta, en principio, en la rentabilidad misma de los cultivos forestales y en la perspectiva de creciente desbalance entre oferta y demanda de maderas tropicales , que hacen del cultivo de maderas uno de los negocios más promisorios en el presente y hacia el futuro. Su mayor dificultad se relaciona con el plazo relativamente largo de recuperación de las inversiones, pues una plantación no es rentable antes de seis años; ello lo hace un negocio poco apto para pequeños inversionistas y campesinos y, en tal sentido, requiere una decidida intervención del Estado para hacerlo posible, lo que no ha impedido que países como Chile y aún algunos países africanos lo hayan convertido en parte importante de su desarrollo.

La viabilidad de un proyecto de esta naturaleza se ve reforzada por el gran interés mundial en conservar la selva, en especial la Amazonia, para lo cual hay recursos internacionales importantes, aunque insuficientes en sí mismos para enfrentar los procesos impulsados por la multinacional de la droga. Tales recursos provienen, en lo fundamental, de programas para la conservación, derivados de los acuerdos de Río de Janeiro en 1992: "Convención de la Biodiversidad", "Agenda XXI" y los tímidos acuerdos sobre bosques, ahora en renegociación. Y también provienen del pago de la deuda ecológica que algunos países desarrollados empiezan a reconocer y se traduce en programas de renegociación de deuda externa, en general conocidos como "*debt-for-nature-exchange*" o intercambios de deuda por naturaleza.

A los anteriores se suman, paulatinamente, recursos tendientes a captar y retener CO_2 atmosférico, como parte de la lucha contra el efecto invernadero y el cambio climático generado por el exceso de este gas en la atmósfera. En efecto, muchas empresas en el mundo están patrocinando programas de reforestación que capten CO_2 y compensen así sus propias emisiones. Por ello se pagan, a países como Costa Rica, hasta 10 dólares por tonelada de CO_2 captado (la ganancia es de aprox. US$ 2.5), lo cual resulta más rentable que pagar los US$ 80 o más que cuesta captar una cantidad equivalente o pagar las multas correspondientes en un país desarrollado. Colombia ha sido clasificado como uno de los once países del mundo con mayor potencial para reforestación y conservación con fines de regulación de efecto invernadero[8]. ¿Por qué no aprovechar este potencial?

Al respecto, cave citar un muy reciente artículo en la misma revista[9], donde se afirma:

---

[8] Bekkering, T.D., Using tropical forest to fix atmosferic carbon: The potencial in teory and practice, Ambio XXI, 1992, (6), 414 – 419.

[9] Dabas, M. And Batí, S., Carbon sequestration through afforestation: Role of tropical industrial plantations, AMBIO XXV, 1996, (5): 327-330.

> *La demanda de estos productos (**de madera**) se incrementará a una tasa significativamente mayor en el futuro inmediato y más allá… Las plantaciones industriales en los trópicos pueden no sólo hacer que los países en desarrollo emerjan como la nueva base manufacturera para satisfacer la demanda global de productos de madera, sino que puede demostrar ser un medio eficiente y económicamente viable para alcanzar una reducción neta del CO_2 atmosférico. No obstante, esto requerirá una reorientación en las políticas… para estimular los niveles requeridos de inversión…*

Se plantea aquí la posibilidad de buscar recursos de las fuentes mencionadas y sumarlos a recursos de los que ahora se invierten en armamentos y pesticidas para constituir un fondo significativo de estímulo y, si es necesario, de subsidio a la actividad forestal como alternativa a los narcocultivos. La reforestación es de por sí un negocio suficientemente rentable y promisorio, pues las maderas tropicales naturales son un recurso cada vez más escaso que deberemos sustituir con cultivos, si aspiramos a permanecer en el negocio. Con apoyos adicionales y una política sólida como respaldo, tiene la posibilidad de convertirse en alternativa de cultivo, contribuir a salvar los bosques naturales, producir la madera del futuro y propiciar la restauración del control ecológico natural sobre las perturbaciones climáticas.

Así, se constituye en una alternativa económica, social y ambientalmente viable para los colonos y campesinos para reconvertir sus actividades y subvencionar los años iniciales de las plantaciones, lo cual parece posible con una inversión relativamente módica del Estado, apoyado en los recursos mencionados. Según la escala que se le dé, es también una importante alternativa económica para el desarrollo de un país que está necesitando alternativas de esta naturaleza, donde sus ventajas comparativas son innegables.

La reforestación no tendría que hacerse forzosamente en la misma región amazónica, que quizá sería mejor desocupar en gran parte y dejar en proceso de regeneración natural, lo cual también sería negociable en términos de CO_2 fijado. Colombia tiene más de 300 municipios que están siendo abandonados por sus habitantes por falta de alternativas y estímulos al agro y por la guerra. Quizá si el programa de reforestación acompaña a uno de reforma agraria y reservas campesinas en tierras del interior, o al menos más cercanas a los centros de consumo, entre ellas, algunas de las incautadas a los narcos, podría revertirse esta tendencia, generando al tiempo un símbolo del propósito nacional de luchar con todo contra los males que nos aquejan.

La idea tiene, para empezar, la virtud de ser una de las pocas que plantea una salida económicamente y socialmente positiva al problema de los narcocultivos y ofrece una perspectiva de futuro. Pero, sobre todo, abre una opción digna y económicamente significativa, no sólo a los campesinos y colonos de la droga, sino a Colombia y a los países que, con su consumo de drogas, están incrementando su deuda ecológica y atentando contra la seguridad ambiental planetaria.